



Artículo leído **159** veces

Juan Carlos Monroy Giraldo - Medellín | Publicado el 13 de agosto de 2009

De duelos sin final, dolor, incertidumbre, impunidad y mucha resistencia civil están llenos los relatos de las víctimas de la desaparición forzada en Colombia.

Cuatro de estas historias se escucharon ayer en la jornada final del seminario internacional sobre Desaparición Forzada en América Latina, que se realizó en Medellín.

El caso de Trujillo, un municipio del Valle del Cauca que entre 1989 y 1994 sufrió masacres y decenas de desapariciones de habitantes fue el primer relato.

Yamileth Vargas, la hija de un ebanista que junto con otras 10 personas fue plagiado y desaparecido el 2 de abril de 1990, fue la encargada de narrar la tragedia de este pueblo y sus gentes.

Según la joven, las desapariciones y muertes empezaron en 1989, cuando se iniciaron unos procesos comunitarios de campesinos que pedían mejores condiciones de vida.

"El padre Tiberio, que lideró los movimientos comunales y empezó a denunciar las desapariciones lo mataron en abril de 1990. Encontraron su cuerpo desmembrado en el río Cauca, pero nunca su cabeza. Los crímenes siguieron y para 1994 teníamos 342 víctimas, entre ellas unos 60 desaparecidos", contó Yamileth.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos asumió el caso y estableció que agentes del Ejército estaban detrás de los crímenes. El Gobierno tuvo que reconocer que se trató de un crimen de Estado. Pero para la joven, no fue suficiente el reconocimiento, pues "la impunidad persiste y casi 20 años después no hay una sola condena y los militares responsables están libres".

Es casi el mismo dolor e incertidumbre que mostró Flor Gallego al contar cómo los paramilitares desaparecieron a 16 habitantes de la vereda la Esperanza (Carmen de Viboral) en 1996.

Flor, quien tiene a su esposo y dos hermanos entre los desaparecidos, relató que "la comunidad de la vereda fue perseguida por todos los actores armados" algunos de los cuales los señalaban de ser colaboradores de la guerrilla.

A eso se suma un desplazamiento forzado en el Oriente en 1990. La impunidad en este caso también reina. "El ex jefe paramilitar Ramón Isaza reconoció que tenían apoyo de la Fuerza Pública, pero no ha habido condenas -recordó-. Lo triste es que muchos padres han muerto esperando la verdad y la justicia para

limpiar sus nombres".

Los años de violencia en la comuna 13, al occidente de Medellín, también se escucharon en la voz de Gladys Guarín, quien recordó como las milicias, primero, y luego los paramilitares sembraron el terror en la zona, con asesinatos y desapariciones, como la de su hijo de 15 años.

Otra historia de dolor y de lucha por la verdad fue el testimonio de Fabiola Lalinde, quien emprendió una búsqueda incansable por 12 años a pesar de las amenazas hasta encontrar los restos de su hijo Luis Fernando, desaparecido en 1984, y demostrar la responsabilidad de agentes del Estado. El proceso penal prescribió y fue archivado. Según Fabiola, "eso duele más que la misma muerte".

Tras un análisis de estos casos se concluyó que la desaparición forzada ha sido práctica sistemática con algunos patrones: estigmatización contra la población civil por parte de grupos ilegales o agentes estatales, crímenes crueles para sembrar el terror y aquiescencia de las autoridades del Estado en muchos casos.

Las víctimas coincidieron en que Colombia requiere una comisión de búsqueda de desaparecidos, agilidad en la identificación de restos y una lucha contra la impunidad.

ELCOLOMBIANO  OM